



Buscar falsos culpables

Culpar a las comunidades autónomas de la grave situación económica en la que está sumida España me parece tremendamente erróneo y deshonesto. No se fundamenta en los datos que conocemos sobre el déficit ni el endeudamiento de los distintos niveles de las administraciones públicas e ignora una realidad flagrante: las partidas presupuestarias de gasto más importantes en las que se sustenta el Estado del Bienestar y que garantizan, por tanto, la prestación de servicios básicos como son la sanidad, la educación, la cura a personas mayores y personas con discapacidad o la atención a colectivos en riesgo de exclusión social y en situaciones de severa pobreza, recaen sobre las comunidades autónomas y no sobre el Estado. Por poner un ejemplo, el 93,4% de los gastos en sanidad y el 93,1% de los gastos en educación en Catalunya dependen de la Generalitat. Esta cuestión es especialmente relevante en el actual contexto de escasez de ingresos y recortes de gastos presupuestarios, pues cada vez que el Estado reduce la financiación autonómica, ahoga todavía más a las comunidades autónomas, limitando su maniobrabilidad y condenándolas al endeudamiento. Culpabilizar a las Comunidades Autónomas es, pues, injusto pero resulta doblemente injusto responsabilizar a aquellos territorios que, en este contexto de insuficiente financiación autonómica y constantes esfuerzos de austeridad, padecen un enorme déficit fiscal estructural como es el caso de Catalunya, el País Valencià y las Illes Balears, pues estas Comunidades contribuyen al Estado más de lo que reciben del mismo para hacer frente a sus obligaciones con los ciudadanos. El presupuesto autonómico se concentra en más de un 60% en el gasto y la in-

versión social y sabemos que éste es un gasto productivo.

En cualquier caso, esta desconfianza hacia lo autonómico, y por extensión a lo social, ha sido el planteamiento que desde prácticamente el inicio de la crisis se ha ido difundiendo desde medios de comunicación con una capacidad de crear estados de opinión realmente poderosos. Y no sólo en el interior de España. De manera muy evidente, ha existido un enorme interés en demonizar a las Comunidades Autónomas a través de medios de comunicación internacionales tan influyentes hoy en día como *The Economist* o el *Financial Times*. La campaña ha sido tal que la credibilidad del Gobierno central en su respuesta a la crisis era directamente proporcional a su capacidad de reducción, control y supervisión del gasto autonómico.

La idea que ha calado en amplísimos sectores de la opinión pública es que la crisis está fundamentalmente vinculada a la mala gestión de las Comunidades Autónomas, que han derrochado los recursos públicos en gastos superfluos e inútiles. Hacer frente a la crisis fundamentalmente implica atar en corto a las Comunidades Autónomas. De ahí, por ejemplo, la reforma pactada unilateralmente, y batiendo récords de celeridad en Derecho Constitucional comparado, con que nos obsequiaron socialistas y populares a finales de la pasada legislatura y que limita de manera absolutamente desproporcionada la autonomía financiera de las Comunidades. La última perla, ciertamente populista, de este proceso de deslegitimación del Estado autonómico ha sido la amenaza de prisión para los responsables autonómicos que incumplan el techo de gasto que les marcará la próxima Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Echar un vistazo a los datos del Ban-



F. MORENO

La parte del león del endeudamiento público en España, y con una enorme diferencia, está en las cuentas del Estado y no en el resto de las administraciones públicas, como se ha hecho creer

co de España sobre los números totales de la deuda pública, por ejemplo, es muy clarificador. Así, la deuda de la Administración central, según el cálculo del Protocolo de Déficit Excesivo, superaba los 530.000 millones de euros, frente a los poco más de 135.000 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas o los 36.000 millones de las corporaciones locales. La parte del león del endeudamiento público en España, y con una enorme diferencia, está en las cuentas del Estado y no en el resto de las administraciones públicas, como se ha hecho creer. Algo parecido sucede en el caso del déficit público. Según datos del propio Ministerio de Hacienda, las cifras de la ejecución presupuestaria para 2010 muestran que el déficit de la Administración central superó los 50.000 millones, mientras que el déficit de las Comunidades alcanzó los 30.000 millones.

Y es que estoy convencido de que en la carga contra el gasto autonómico la ideología pesa mucho. No podemos negar, de ninguna de las maneras, que ha existido mala gestión en el ámbito autonómico. Y también en el central. Pero, dicho esto, quienes hoy cargan las tintas contra el déficit y la deuda de las CC AA están cuestionando el Estado plural y compuesto y el Estado del Bienestar que, en el caso español, están íntimamente entrelazados. Claro que necesitamos rigor y austeridad en la gestión de lo público, y es evidente que los márgenes reales de actuación de la política económica en el actual contexto son escasos, con independencia de que pensemos que sin políticas orientadas al crecimiento y la creación de empleo a corto plazo la situación va a empeorar pero, en todo caso, no busquemos falsos culpables. ●

Diputado por CiU en el Congreso de los Diputados